

Presentación

En los meses finales de 2022 Europa está inmersa en una crisis múltiple. Las medidas contra la pandemia del coronavirus han resultado en una ejecutoria económica muy complicada y llena de nubarrones en el horizonte. En particular, los frenazos a la actividad económica y la interrupción del comercio internacional, y la subsiguiente, y un tanto errática, recuperación de ambos, han contribuido sustancialmente a un alza de los precios de las materias primas y, en especial, de los productos energéticos desde la segunda mitad de 2021. Al alza de precios se ha añadido el mayor desorden de los mercados energéticos debido a la invasión rusa de Ucrania y a las sanciones económicas adoptadas por Estados Unidos y Europa contra Rusia, todo lo cual ha redundado no solo en más alzas de precios, sino también en problemas de abastecimiento.

Estos sucesos se desarrollan en el contexto de una gran estrategia europea, apenas cuestionada, de transición energética o de descarbonización de la economía, planteada como contribución a combatir el cambio climático. Dicha estrategia debería llevar a los países miembros de la Unión Europea a reducir intensamente sus emisiones netas de gases de efecto invernadero en muy pocos lustros. Se trata de una estrategia ambiciosa y muy decidida: ante la tormenta perfecta de crisis arriba esbozada los dirigentes europeos han respondido “aumentando la apuesta”: si hasta hace dos años suscribían el compromiso de reducir aquellas emisiones un 40 por ciento respecto al nivel de 1990, apenas hace dos años elevaron el porcentaje hasta el 55 por ciento.

Sobra decir que, independientemente de la velocidad a la que se lleve a cabo esa transición energética, comportará cambios muy sustantivos en la producción de la energía y en sus usos, y, según piensan algunos, en el propio orden socioeconómico de países desarrollados como los europeos.

En este marco, y en cumplimiento del compromiso de Funcas de proporcionar información y argumentos sobre las cuestiones fundamentales que afronta la sociedad española de cara a sustentar mejor el debate público, este número de PANORAMA SOCIAL está dedicado a la transición energética. Coordinado por Juan Carlos Rodríguez (Analistas Socio-Políticos y Universidad Complutense), incluye ocho artículos que, sin obviar las dimensiones técnica y económica de la temática, enfatizan las dimensiones sociales, culturales, políticas y geopolíticas. Contribuyen a ello especialistas en la materia españoles y extranjeros, procedentes de disciplinas variadas.

La centralidad de la dimensión cultural de la transición energética está claramente presente en el artículo de **Manuel Arias Maldonado** (Universidad de Málaga). Su punto de partida es el siguiente: a pesar del amplio consenso social observable acerca de la necesidad de ir hacia un mundo que confíe menos en las fuentes fósiles para su suministro energético, no hay acuerdo acerca de cómo llevar a cabo esa transición ni, mucho menos, acerca de la configuración del mundo “descarbonizado” de llegada. El intrincado debate se entiende mejor si se analizan dos de los imaginarios sociales que

subyacen a las posiciones básicas en conflicto: el decrecimiento y el ecomodernismo. Ambos aspiran a superar la sociedad industrial, pero el primero rechaza la modernidad que dio lugar a ese tipo de sociedad, mientras que el ecomodernismo propone reformarla sin renunciar a lo fundamental de aquella. El autor discute la viabilidad de ambos planteamientos en las sociedades democráticas actuales, concluyendo que, por ahora, la estrategia del ecomodernismo es mucho más probable en la práctica.

El artículo de **Bjorn Lomborg** (Copenhagen Consensus Center) podría considerarse como muestra de ecomodernismo. A su juicio, en la discusión pública prevalece un notable alarmismo, que contribuye a que el sentimiento predominante sea el de miedo. Sin embargo, los daños previsibles, según las estimaciones de científicos y de organismos oficiales, no justifican tanta alarma ni, por tanto, algunas de las medidas políticas basadas en semejante percepción (entre ellas, las promovidas por la Unión Europea) cuyos costes superarían a los beneficios. Afrontar los problemas derivados del cambio climático requeriría, según el autor, más innovación, más adaptación y más georingeniería, además de niveles más altos de desarrollo económico para mejorar la seguridad climática (cuanto más rico es un país, más recursos puede destinar a combatir los problemas medioambientales).

En el artículo de **Eric Heymann** (Deutsche Bank) se explicitan algunos de los elementos de la dimensión técnica y económica de la transición hacia una economía “climáticamente neutral” que necesariamente acabarán aflorando en la discusión pública sobre la materia, en parte, como resistencias, aunque hasta ahora hayan quedado bastante apagados. En términos técnicos, se trata de saber si el público y los decisores estarán realmente abiertos a soluciones distintas de las preferidas actualmente; es decir, si, a pesar de los extendidos recelos en las opiniones públicas y en las clases políticas, se le otorgará un papel fundamental a la energía nuclear, o a las medidas no tanto, o no solo, de mitigación (reducción de emisiones), como de adaptación a las consecuencias del cambio climático. En todo caso, argumenta el autor, no cabe imaginar una transición energética sin ganadores o perdedores y, seguramente, sin que, al menos un tiempo, sufran considerablemente la prosperidad y el empleo.

Sobre una de las cuestiones respecto a las que Heymann reclama más apertura de miras, la de la energía nuclear, versa el artículo de **Josep Esluga Trenc** (Universitat Autònoma de Barcelona) y **Albert Presas** (Universitat Pompeu Fabra), y lo hace enfocando la atención sobre la opinión pública. A partir de análisis empíricos basados en datos de ocho países representativos, los autores distinguen patrones diferentes en el grado y el tipo del rechazo o de la aceptación de la nuclear en la población, condicionados por factores político-institucionales y socioculturales, que van más allá de la percepción de las ventajas y los riesgos. Sugieren que la solución nuclear será más fácil en países en que la población tenga una mayor confianza en la industria y en las autoridades, lo cual se relaciona, entre otros factores, con la existencia de unas normas claras, la percepción de justicia y búsqueda del interés general en los comportamientos de las elites políticas y la transparencia en la toma de decisiones.

A otra de las resistencias a las que se refiere Heymann atiende el artículo de **Juan Carlos Rodríguez** (Analistas Socio-Políticos y Universidad Complutense). Se trata de las que puede presentar el público, como consumidores o como ciudadanos, a menús de energía eléctrica dominados por las renovables intermitentes (eólica, solar) que no cumplan la extendida promesa de ser más baratos que los anteriores, basados, sobre todo, en las fuentes fósiles y, en algunos casos, en la nuclear. El artículo recuerda que el debate acerca de si los costes de las renovables intermitentes son ya o van a ser pronto más bajos que los de las fuentes fósiles o de la nuclear está lejos de hallarse cerrado. En este contexto, resulta de especial interés escuchar la voz del público. La recogida a través de encuestas internacionales muestra que las conductas medioambientales de los europeos más frecuentes son las que comportan muy pocos costes, sin que, además, se aprecie una tendencia al incremento de estas conductas. Por tanto, las declaraciones de implicación medioambiental intensa no se compadecen con los comportamientos cuando estos pueden medirse. El público se muestra muy favorable a las energías renovables, pero siempre que sean baratas o muy baratas, y manteniendo unas preferencias que resaltan la seguridad del suministro energético, el cuidado por el medio ambiente y el mantenimiento del nivel de vida.

Especialmente interesados en que la transición energética no redunde en una electricidad más cara están los verdaderos “perdedores” de las crisis energéticas caracterizadas por la escasez y, sobre todo, por precios al alza. Son los hogares más vulnerables, los que están en riesgo de pobreza energética, los que centran la atención de **Guillermo García Álvarez** (Vrije Universiteit Amsterdam). Tras señalar la crudeza de las cifras de la crisis energética actual en términos del enorme alza de los precios, no acompañada por el crecimiento de los ingresos y discutir los indicadores subjetivos y objetivos de pobreza energética, se ocupa de las medidas adoptadas en España para paliarla y de su eficacia. Según su análisis, el bono social tuvo efectos mínimos, y las más recientes, de 2021 y 2022, pueden aliviar los efectos del gran aumento de los precios de la electricidad, pero son insostenibles a medio y largo plazo.

La dimensión geopolítica de la transición energética se trata específicamente en el artículo de **Gonzalo Escribano** (UNED y Real Instituto Elcano) e **Ignacio Urbasos** (Real Instituto Elcano) sobre el hidrógeno renovable en España, una fuente de energía a la que atribuyen gran potencial en un mundo mucho más descarbonizado. Considerada en principio una fuente de energía de alcance regional, con usos muy cercanos al lugar de producción, no cabe descartar que se genere un comercio internacional, siquiera europeo. A juicio de los autores, España podría insertarse con éxito en los intercambios europeos de hidrógeno verde, dados sus precios y su gran potencial de energías renovables, incluyendo su competencia tecnológica y su posición cercana a los mercados importadores. Ahora bien, esa posibilidad depende de diversos factores, entre ellos, la capacidad política de articular una gran estrategia nacional de hidrógeno verde en la que participen las comunidades autónomas o las iniciativas de actores no europeos de desarrollar planes ambiciosos de exportación de hidrógeno verde a la Unión Europea.

El artículo de **Roberto Gómez Calvet** (Universidad Europea de Valencia) también se ocupa de las condiciones que tendrían que darse para que la transición energética llegara a buen término y con los menores costes posibles. En este caso, lo hace desde el punto de vista de lo que haya de ocurrir con la intensidad energética de la economía española o, más bien, de los distintos sectores de actividad en España. Con una

dependencia energética del exterior superior al 75 por ciento en 2020, y un recurso a las renovables intermitentes todavía muy lejos de cubrir la demanda final, España afronta retos de gran calado en ramas como las de la industria manufacturera, el transporte y la generación de electricidad; más todavía si se tiene en cuenta que la apuesta por la eólica y la solar habrá de contar cada vez más con el almacenamiento de energía como respaldo, en la medida en que los planes nacionales no prevén que aumente el peso del gas natural y sí que se reduzca el de la nuclear. En todo caso, la reducción de la demanda de energía debería resultar de una mejora de la eficiencia y no de una limitación forzosa de la producción y/o el consumo de bienes y servicios, con el consiguiente perjuicio para el bienestar material de sociedades como la española.

En última instancia, con las contribuciones recogidas en este número de PANORAMA SOCIAL intentamos contribuir a que el debate público español sobre la transición energética sea más realista y tenga en cuenta perspectivas con frecuencia ignoradas, en concreto las relacionadas con las opiniones y los comportamientos de la ciudadanía, a la que afectan crucialmente las decisiones estratégicas en materia de transición energética.